

# **Explicando las movilizaciones estudiantiles de 2011. Una perspectiva desde la sociología política**

**Autor: César Guzmán-Concha**

**Artículo para ser presentado en el seminario “Legitimidad y  
Acción Colectiva”**

**Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)**

**Santiago de Chile, 2 y 3 de diciembre de 2014**

## **Resumen**

Este artículo ofrece un resumen de la trayectoria y características del movimiento estudiantil chileno durante las jornadas de protesta de 2011. El propósito es triple: (a) explorar en sus causas; (b) describir sus implicancias y significado histórico; y (c) determinar la especificidad del movimiento en el contexto de la ola mundial de protesta iniciada aquel año. Se observa que una serie de causas confluyeron para generar el movimiento estudiantil de 2011. En particular, la convergencia de agravios, oportunidades políticas, recursos de organización, identidades, y lazos de solidaridad, generó condiciones para que las tradicionales protestas de estudiantes que se suceden cada inicio de año académico se transformaran en el ciclo de protesta popular más intenso y con mayores efectos de las últimas cuatro décadas.

## 1. Introducción

Este artículo analiza el ciclo de movilizaciones de los estudiantes chilenos durante 2011, describe sus principales características, y discute críticamente las interpretaciones más difundidas sobre éste. Estas interpretaciones han intentado explicar las características del movimiento estudiantil de ese año prestando especial atención a alguna de las siguientes dimensiones: (a) rebelión de (nuevas) clases medias endeudadas; (b) protesta de jóvenes enfadados contra un gobierno de derechas; (c) imposibilidad del gobierno para implementar estrategias puramente represivas de gestión de la protesta por sus mayores costos políticos; (d) nuevas tecnologías de la información y comunicación que han favorecido la acción colectiva en escalas impensables en el pasado; (e) efecto de la masificación educacional, que ha provocado más secularización, frustración, y cuestionamientos a las elites tradicionales; (f) manifestación de contradicciones estructurales que anuncian el derrumbe del “modelo”. Las narrativas predominantes sobre el tema tienden a ser unidimensionales –ponen en el peso de la explicación en una sola dimensión o variable–, a la vez que exhiben un sesgo estructuralista –pues descartan otros factores que no sean el endeudamiento estudiantil, la mercantilización del sistema educativo público (neoliberalismo), las siempre-en-emergencia y nunca satisfechas clases medias (teoría de la modernización) (Tironi, 2011; Tuluy, 2013), o la aparición teleológica de una sociabilidad popular reñida con el lucro y el capitalismo (Salazar, 2011). Las narrativas predominantes se sitúan en un nivel estructural, y –correctamente– miran hacia el sistema económico y político (por ej. Mayol, 2012). Pero no prestan suficiente atención a la configuración histórica de la política contenciosa nacional –como si la historia del conflicto social, o la formación de la contestación política popular, no fuese también un factor histórico. Además, no articulan apropiadamente la dimensión estructural con el nivel meso y la coyuntura.

Como lo sugiere numerosa investigación reciente en el campo del conflicto político y la acción colectiva contenciosa, ésta emerge en presencia de agravios, oportunidades para la acción, identidades, emociones y pertenencia social (Della Porta y Diani, 2006; Klandermans, et al 2008; Tarrow, 1998). Esos componentes se combinan en distintos planos temporales, que configuran a la vez distintos planos analíticos (Aguilar 2008). El primer plano es abstracto, que configura una causalidad de nivel socio-estructural. El segundo es concreto y se expresa en variables observables y codificables. Este trabajo sostiene que el movimiento estudiantil de 2011 fue el resultado de la combinación de factores macro-estructurales (o históricos) con factores de nivel meso y micro-sociales. En particular, el efecto combinado de agravios, oportunidades, identidad, emociones y pertenencia, explica la *aparición, magnitud e intensidad* de la protesta estudiantil chilena de 2011. Sin embargo, considerados en forma aislada, estos factores no pueden explicar las características de este fenómeno. Proponemos

que el examen combinado de estos cinco componentes permite ir más allá de las explicaciones predominantes en el medio nacional, los que se resumen de la siguiente forma:

(1) Un sistema educativo en deterioro en los tres niveles (básico, medio y superior), a causa de la aplicación prolongada de políticas de corte neoliberal durante las últimas tres décadas. La mercantilización del sistema educativo iniciada durante la dictadura ha tenido efectos negativos en la calidad de la educación, consagrando además un sistema de segregación por clases sociales. En el ámbito universitario, la extensión de los préstamos bancarios para pagar colegiatura y/o aranceles, masificó la matrícula universitaria pero a expensas de la calidad educativa, con un gran costo en términos de endeudamiento para las familias. Este sistema hizo crisis en 2011.

2) Un sistema político con instituciones impermeables a las demandas de actores extra-institucionales. La llegada de un gobierno de derecha, después de 20 años de gobiernos de la centro-izquierda, reforzó la percepción popular sobre la incapacidad de las instituciones ante reclamos que no eran especialmente nuevos. El tránsito de la centro-izquierda a la oposición ofreció a los movimientos sociales un abanico de potenciales, nuevos aliados.

(3) La identidad del movimiento estudiantil, que durante décadas se ha caracterizado por un sentido de lucha, oposición y movilización, con sus principales líderes perteneciendo a partidos o grupos de la izquierda extra-institucional. Esta identidad se constituye en un recurso muy importante para la acción colectiva contenciosa.

(4) Sentimientos de injusticia e indignación emergieron entre estudiantes y sus familias en la medida que el endeudamiento crecía y sus demandas no eran atendidas. Cuando el conflicto ya estaba declarado y los estudiantes salieron a las calles, el gobierno se limitó a reunirse con sus representantes pero no accedió a cambiar la orientación de su política educacional, lo que reforzó sentimientos de desazón e indignación. El movimiento estudiantil dio cauce a esos sentimientos, conectándolos con un juicio prácticamente unánime entre distintos sectores sociales, sobre la injusticia económica y distributiva en el país.

(5) Las organizaciones de acción colectiva presentes en el mundo universitario, las federaciones, están enraizadas y cuentan con legitimidad interna (dentro de sus bases) y externa (el público, los medios, el gobierno). Éstas han sido un recurso fundamental para comunicar las demandas y persuadir a la opinión pública, y para organizar y liderar la protesta. Estas organizaciones han sido la reserva de memoria del movimiento estudiantil, conectándolo con ciclos de luchas precedentes (por ej. la lucha contra la dictadura en los

1980s, o por la reforma universitaria en los 1920s o los 1960s), lo que, a su vez, ha facilitado la reproducción de una identidad favorable a la acción colectiva contenciosa.

Este artículo procede de la siguiente forma. Primero describe en forma sintética el desarrollo del conflicto educacional de 2011. Luego, en secciones separadas, analiza los agravios, las oportunidades políticas y la cultura e identidad política presente en los estudiantes, en tanto causas concomitantes de la irrupción del movimiento estudiantil de aquel año, de su magnitud, y de las implicancias generales de dicha irrupción para el país. Finalmente, se concluye resumiendo el argumento general y se indican algunas líneas adicionales para orientar la investigación empírica.

## **2. El conflicto<sup>1</sup>**

A finales de abril de 2011, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (CONFECH) anunció la realización de una jornada de protesta para el 12 de mayo. Con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 15 mil personas marcharon por las calles de Santiago detrás del lema “No hay futuro sin educación pública de calidad”. Las principales demandas de los estudiantes planteaban el incremento del financiamiento de las universidades, una reforma de los procesos de admisión, y la democratización de los gobiernos universitarios. Esta movilización, y las que le siguieron, estaba dirigida a influir en el discurso que el presidente formula al parlamento el 21 de mayo, día inaugural del período legislativo en el país. La cuenta pública que los presidentes deben entregar cada año al congreso pleno, es al mismo tiempo la oportunidad en la que éstos anuncian sus prioridades legislativas para el período. En ocasiones, el ejecutivo aprovecha la oportunidad para anunciar grandes reformas. El 21 de mayo, convocados por las organizaciones estudiantiles, más de 20 mil manifestantes se congregaron en las afueras del parlamento en Valparaíso para llamar la atención del poder político sobre los problemas del sistema educativo. Tal como se esperaba, el presidente no hizo anuncios de cambios significativos en dicha área, lo que llevó a los estudiantes a declarar intenciones de intensificar sus protestas. En una conferencia de prensa, Camila Vallejo en representación de la CONFECH, anunciaba nuevas marchas y declaraba la posibilidad de que las universidades comenzaran una huelga indefinida si el gobierno no atendía a sus planteamientos.

Mientras el ministro de educación respondía declarando que los manifestantes eran una “minoría ideologizada” y que los estudiantes habían ido “demasiado lejos”, los estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones. Las demandas de los secundarios ensanchaban, y llevaban un paso más adelante, las de sus compañeros universitarios: educación gratuita,

---

<sup>1</sup> Para profundizar en el curso del conflicto, se puede consultar Urra (2012), Vera (2012), y Fernández (2013).

término de las escuelas con fines de lucro, y un incremento sustantivo de la inversión pública para corregir la desigualdad y segregación que afectan particularmente a las escuelas públicas municipales. El 9 de junio 26 liceos fueron ocupados por los estudiantes, a la vez que la mayoría de las universidades estatales tenían sus actividades suspendidas debido a ocupaciones o huelgas de los estudiantes. Entre junio y julio, el conflicto llegó a su punto de máxima intensidad en cuanto a cantidad de manifestantes, y escuelas y universidades ocupadas o con paralización total de actividades. A fines de julio, solo en Santiago alrededor de 140 liceos estaban ocupados por sus estudiantes. Las marchas del 16 y el 30 de junio refutaron la expectativa del gobierno, en cuanto a que después de algunos días las manifestaciones disminuirían y la normalidad volvería a reinar en las aulas: más de 100 mil personas marcharon en Santiago, y se realizaron marchas por la educación en casi todas las principales ciudades del país con sedes universitarias. Junto a los estudiantes, marcharon también la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los trabajadores públicos (ANEF), políticos de los partidos de oposición (algunos de los cuales fueron increpados y expulsados de las marchas por parte de manifestantes), rectores y profesores universitarios, e incluso conocidas figuras de la televisión, marcando una articulación inter-generacional no vista previamente. Estas marchas se transformaron, casi sin lugar a dudas, en las manifestaciones más grandes en el país desde 1990.

El impresionante apoyo recibido por el movimiento estudiantil, y el colapso de popularidad del gobierno, le llevaron a creer que, dado que no tenía nada que ganar con el conflicto, la combinación de represión policial y radicalización de parte de las alas más radicales de los manifestantes, conduciría al propio movimiento a su agotamiento. Sin embargo, el aumento de la represión provocó una reacción de indignación pública que terminó favoreciendo al propio movimiento estudiantil. El 5 de agosto, día de protesta nacional convocado por los líderes estudiantiles, terminó con más de 900 manifestantes detenidos, 14 heridos (2 de los cuales policías), y con el centro de Santiago convertido en una especie de campo de batalla con escaramuzas constantes entre fuerzas especiales y manifestantes. La total desproporción de la reacción policial llevó a los líderes estudiantiles a convocar, en forma improvisada, a una protesta de cacerolas para esa misma noche. Los cacerolazos fueron una de las formas de protesta más típicas durante la dictadura militar, pues permitía manifestarse desde el interior de los hogares, brindando cierto anonimato en un contexto en el que las represalias por disenter del régimen eran una posibilidad cierta. En aquel tiempo los cacerolazos esquivaban creativamente el estado de sitio, que impedía salir a la calle durante las jornadas de protesta, y se adaptaban al temor a salir a la calle a manifestarse abiertamente. Ahora el contexto era muy distinto, pues en numerosos barrios de la ciudad el sonido de ollas golpeadas con cucharas de madera o metal expresaba el repudio a la represión y a la gestión del gobierno del conflicto educacional. Muchos salieron a las calles o se congregaron en plazas para hacer

sonar sus cacerolas. #cacerolazo se convirtió en *trending topic* mundial en twitter esa noche, revelándose como un mecanismo de difusión de la acción contenciosa. Esto, además, ilustra el grado de difusión o masividad de la misma.

A partir de ese momento, el hostigamiento policial hacia los manifestantes fue permanente, con el gobierno utilizando un discurso de 'ley y orden' que legitimaba el descontrolado accionar de los carabineros (Durán 2012). Es evidente que la gestión de la protesta en la calle por parte de la policía, contribuyó a una espiral de violencia que reafirmaba los propósitos del gobierno, entre ellos reforzar su núcleo duro de apoyo ante las críticas recibidas por una supuesta actitud 'buenista', que no habría atajado al movimiento cuando debió hacerlo.

Esto desmiente parcialmente el análisis de Eduardo Engel, quien afirma que "la hipótesis que me parece más plausible es que las nuevas tecnologías facilitan la coordinación de grupos ciudadanos para protestar, al mismo tiempo que dificultan la represión y las campañas de desprestigio por parte de los gobiernos. En jerga económica, los costos de protestar y organizarse cayeron, mientras los costos de reprimir y desprestigiar los movimientos crecieron" (La Tercera, 10 de agosto de 2011). Las políticas gubernamentales de control de la protesta en Chile difícilmente pueden ser calificadas de tolerantes en el contexto internacional. Esto desmiente la idea de que la imposibilidad de reprimir al movimiento estuvo a la base de su propagación. Cuando el gobierno opta por una estrategia de hostigamiento y desgaste, los costos de seguir protestando se incrementan, y sin embargo las protestas continúan en niveles inusualmente altos. Además, en la medida que las movilizaciones (tomas, paros) se prolongaban en el tiempo, los costos de continuar movilizándose seguían incrementándose. A medida que avanzaba el invierno, en muchos lugares las movilizaciones ya se habían prolongado por varias semanas, sobrepasando largamente los niveles precedentes de extensión en el tiempo y de radicalidad. Aunque es cierto que costos en alza explican la caída de las movilizaciones y las divisiones en el propio movimiento, especialmente a partir de septiembre, un enfoque microeconómico no dice nada respecto a cuáles son los umbrales que transforman incentivos para la acción en desincentivos y costos, cómo estos van cambiando con el curso de una movilización, y qué papel tienen otras dimensiones (como las culturas políticas, la polarización, el escalamiento) en la configuración de las motivaciones para protestar. Por otra parte, el rol de las nuevas tecnologías de información y comunicación podría estar exagerado. Los jóvenes están socializados en ellas hace bastante tiempo. Internet y los teléfonos móviles son tecnologías adquiridas para ellos. Probablemente éstos tuvieron un rol en la articulación de una respuesta inmediata ante ciertos eventos. Por ejemplo, durante la jornada de protesta del 5 de agosto la convocatoria del cacerolazo fue rápidamente difundida por las redes sociales,

generando un impacto significativo. Pero esto ocurrió cuando las manifestaciones ya habían adquirido unas dimensiones imprevistas.

El gobierno ofreció incrementos en el presupuesto del sector y una expansión de las becas y subsidios con el fin de reducir los intereses en los préstamos CAE. Estas propuestas se dirigían a morigerar los peores efectos del modelo de financiamiento estudiantil para la educación superior, pero estaban lejos de modificar los principios básicos de funcionamiento del sistema, a saber: subsidio a la demanda (préstamos a estudiantes), amplia participación del sector privado, y la libre competencia entre instituciones educativas (entre escuelas y entre universidades). Estos principios, argüía el gobierno, permitirían la auto-regulación de las entidades y conducirían a incrementos continuos de calidad de la oferta educativa.

La invariable posición del gobierno, incapaz de ofrecer cambio sustantivo alguno a pesar de la persistencia de altos niveles de movilización y de una opinión pública volcada mayoritariamente a favor del movimiento, planteó una cuestión incómoda: no existía un mecanismo institucional que permitiera dirimir este tipo de divergencias. Ante ello, el movimiento estudiantil propuso la realización de un plebiscito nacional. Aunque los municipios tienen facultades para convocar consultas vinculantes sobre temas de su competencia, la constitución de 1980 no cuenta con mecanismos de democracia directa. Así, lo que empezó como un conflicto sobre políticas educativas se transformó en un problema político que tocaba al corazón mismo del orden institucional: la constitución de 1980. El movimiento estudiantil cuestionaba la legitimidad de los grupos que habían gozado de acceso exclusivo al poder político desde el fin de la dictadura. De hecho, cuando los estudiantes cuestionaron el consenso de las elites –originado con los arreglos que hicieron posible la transición a la democracia, que conforman los pilares del sistema sociopolítico todavía vigente– y denunciaron la imposibilidad de concretar en hechos una demanda ciudadana de amplio respaldo, se completó el proceso que transformaba una demanda sectorial en el más consistente llamado a cambiar la institucionalidad del país desde las grandes protestas contra la dictadura de 1983.

### **3. Agravios: mercantilización y financiarización del sistema educativo**

El sistema educativo chileno es, en gran parte, el resultado de las reformas implementadas durante el régimen de Pinochet. Estas reformas terminaron con la antigua noción de la educación como un derecho social de provisión estatal, y crearon un mercado educacional en todos los niveles del sistema (educación pre-básica y básica, media, y universitaria y de formación técnico-profesional). Los principios de libre mercado han creado un sistema de segregación educativa por el que las familias de altos ingresos envían a sus hijos a escuelas privadas de alta calidad, mientras que las familias de bajos ingresos envían a sus hijos a

escuelas públicas municipales que en muchos casos tienen pocos recursos, cuentan con personal desmotivado y mal pagado, y están mal administradas (Bellei et al 2010; Cabalín 2012; Mizala y Torche 2010). Este sistema ha sido descrito como “sistema de segregación de clases” (OCDE 2004) o “apartheid educacional” (Waissbluth 2011). En el sistema puesto en marcha por la dictadura, inalterado desde entonces, el gasto de las familias se transformó en el principal mecanismo de financiación. En el nivel pre-básico, la participación del gasto de las familias alcanza al 31% del total, un guarismo que supera el promedio (20%) de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En la educación superior, las fuentes privadas constituyen el 84% del financiamiento total del sistema, muy por encima del 27% de los países de la OCDE (OCDE 2008). Durante las últimas dos décadas las universidades privadas han proliferado, lo que multiplicó la matrícula universitaria. Pero debido a numerosos vacíos institucionales y a la lógica intrínseca al sistema de educación superior, la calidad de la oferta educativa se ha resentido sensiblemente. Además, numerosas instituciones han concentrado su actividad casi exclusivamente en la docencia, sin realizar, en la práctica otras funciones como investigación o creación artística. Dado que las diferencias de calidad de los diplomas otorgados es evidente, el mercado de trabajo ha reaccionado devaluando notablemente ciertos títulos profesionales de las instituciones consideradas de baja calidad. La irracionalidad del sistema ha provocado también la saturación de ciertas profesiones, especialmente de aquellas para las que no es necesario una gran inversión para la tarea formativa. Dado que tres cuartas partes de las universidades son privadas, éstas han absorbido gran parte de la demanda. Aunque por ley ninguna universidad puede tener fines de lucro (están obligadas a reinvertir sus ganancias), muchas de ellas son negocios en toda regla (se transan en el mercado, cambian de dueños, reparten utilidades a sus propietarios, etc.) (Mönckeberg, 2007). Tanto las universidades públicas como las privadas deben financiarse con las matrículas, cuyos precios se han incrementado más de un 60% en la década 2001-2010. De este modo, la educación superior chilena es una de las más caras del mundo –en proporción al PIB per cápita. Los costos crecientes de las matrículas, sumado a altas tasas de interés que las familias deben pagar por sus créditos universitarios, ha conducido a muchos estudiantes a incumplir el pago de los créditos. Por otro lado, la duración de los programas académicos, de cinco años en la gran mayoría de los casos, considerado excesiva por muchos, ha contribuido también a incrementar las deudas de los estudiantes. La deserción ha aumentado, especialmente en las universidades privadas, por lo que muchos ingresan al mercado laboral sin título pero con una deuda enorme.

Es interesante observar que este panorama es la consecuencia de las políticas implementadas por los gobiernos de la centro-izquierda a partir de 1990, que no han alterado los principios de autofinanciamiento de las universidades (incluyendo las estatales) y de subsidio a la demanda. Pero el detonante de la rebelión estudiantil de 2011 fue la implementación en 2005

de un novedoso esquema de subsidio a la demanda, el Crédito con Aval del Estado (CAE), que permitió el acceso al crédito a los estudiantes de las universidades privadas. Hasta entonces, sólo los postulantes a las 25 universidades del consejo de rectores podían acceder a créditos protegidos a una tasa de interés del 2%. El CAE, en cambio, imponía una tasa de 5.8%, y era administrado por la banca privada, la que, naturalmente, cobraba una comisión al Estado por su labor. En 2009 el Estado pagó más dinero a los bancos que el total de créditos recibidos por los estudiantes (Mayol et al 2011). Además, el CAE financiaba los aranceles universitarios en relación al arancel de referencia, siempre inferior al arancel real, con lo que la mayoría de los beneficiarios aún debían pagar parte de sus colegiaturas. El Banco Mundial calculó que la deuda adquirida alcanzaba un promedio del 180% del ingreso anual, con los pagos mensuales en torno al 18% de los ingresos durante 15 años (2011), y se ha estimado que un alrededor de un 50% de los deudores fracasa en retornar sus préstamos a tiempo (Banco Mundial 2011).

Es indudable que en el ámbito educativo se concentraron numerosos problemas, muchos de los cuales son la consecuencia de una combinación de negligencia de la autoridad y dogmatismo neoliberal. Sin embargo, cabe preguntarse por qué la rebelión estalló entre los estudiantes y no en otros ámbitos tan o más afectados por abusos, desigualdad y negligencia estatal. ¿Por qué, por ejemplo, no ha ocurrido un estallido similar entre los trabajadores o el movimiento obrero? Ámbitos sensibles para los asalariados fueron convertidos al mercado durante los 1980s, y ninguna de dichas políticas fue revertida por los gobiernos de la centro-izquierda. El rasgo que define las reformas implementadas en todos esos ámbitos es la radicalidad en la implantación de políticas públicas inspiradas en principios neoliberales. La protección social exhibe los efectos del cambio de modelo llevado a cabo por la dictadura, cuando el sistema de pensiones fue privatizado y se pasó a un modelo de capitalización individual pionero a nivel mundial. La cuantía de las pensiones de la gran mayoría de los pensionistas del sistema de AFPs es muy baja. El acceso al seguro médico está también extremadamente segregado debido a la instauración del subsidio a la demanda y a la apertura del sistema al capital privado. Aunque los afiliados al sistema estatal (FONASA) son casi dos tercios del total, todos deben financiar parcialmente sus gastos médicos, y la cobertura estatal exclusiva se mantiene como categoría residual (solo para personas de muy bajos ingresos como jubilados, indigentes, etc.) y de baja calidad (con prolongados tiempos de espera para acceder a las prestaciones) (Riesco 2011; Solimano 2012). Los efectos de los mercados de trabajo desregulados y de una institucionalidad laboral que favorece a los empresarios y que contiene una orientación anti-sindical en sus fundamentos, han sido ampliamente documentados por diversos estudios (Mizala y Romaguera 2001; Reinicke y Valenzuela 2011; Sehnbruch 2006). En cuanto al sistema de relaciones laborales vigente, sus características se pueden resumir en tres aspectos: trabas a la sindicalización, imposibilidad de negociar colectivamente por sector de actividad, y trabas al ejercicio del derecho a huelga.

En consecuencia, la respuesta a la pregunta del párrafo anterior no debe ser buscada en la naturaleza de los agravios, sus características estructurales, o su génesis, sino en la capacidad de movilización de los actores que padecen privaciones o abusos. En particular, se debe observar más detenidamente la fortaleza organizativa, la legitimidad de los liderazgos, y las implicancias organizativas de la estructuración institucional del sistema. En efecto, los estudiantes son un sector que no tiene grandes trabas para la organización. No hay barreras ni sanciones por pertenecer a un centro de alumnos o una federación. La pertenencia es relativamente laxa, no hace falta afiliarse formalmente ni pagar cuotas de membresía, se puede votar en sus elecciones o dejar de hacerlo sin consecuencias prácticas, y de hecho es probable que muchos de los que salieron a las calles atendiendo al llamado de sus representantes, no hayan participado de las elecciones en las que dichos dirigentes resultaron electos. Además, la masificación del sistema educativo implica que el fracaso o el error de una política estatal afecta directamente a un amplio sector de la población: una alta proporción de las familias cuenta al menos un miembro en edad escolar o asistiendo a la educación superior. Así, un problema sectorial pueda fácilmente derivar en un asunto nacional, con amplias ramificaciones en distintos niveles.

Si se compara a las federaciones estudiantiles con los sindicatos se observan importantes diferencias. Los sindicatos son extremadamente débiles, tanto en el contexto de la OCDE como de períodos anteriores en el país –incluso con el de la transición. En el contexto OCDE, no se constatan limitaciones similares al ejercicio del derecho a huelga, o la extrema fragmentación de la negociación colectiva que se verifican en Chile. La afiliación sindical y la fuerza de trabajo cubierta por contratos colectivos (11% y 6% de la fuerza de trabajo en 2012, respectivamente), han disminuido desde 1990. De acuerdo a casi todos los parámetros, el sindicalismo es débil considerando sus facultades negociadoras (su poder efectivo) y su representatividad de la fuerza de trabajo. A ello cabe agregar que, debido a la institucionalidad laboral que acepta la negociación colectiva sólo en el ámbito de la empresa (o más precisamente, en el ámbito del RUT), el sindicalismo está forzado a actuar en forma fragmentada.

El sindicalismo está además dividido. Uno de los activos simbólicos más relevantes del sindicalismo nacional fue su aspiración unitaria, evitando la constitución de centrales sindicales ideológicas. A través de ésta, los sindicatos han buscado compensar la tradicional debilidad del asociacionismo industrial chileno. El período de la historia nacional con mayor afiliación fue precisamente el de la Unidad Popular (1970-1973), cuando se alcanzó una tasa del 33% de los asalariados. Aunque en pocos años la afiliación se duplicó, con la tendencia al alza empezando en el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), el nivel de afiliación alcanzado

durante el gobierno de Allende era todavía inferior a las tasas de afiliación de los países escandinavos, inferior a la afiliación en Argentina, e incluso por debajo de las tasas de países liberales como EEUU y el Reino Unido en el mismo período. Además, el alza de afiliación de ese período se explicaba por la acelerada formación de sindicatos en el campo debido a la implementación de la reforma agraria. Desde finales de la década de 1990, con la formación de la CAT, se puede dar por concluida la época unitaria o de convergencia. Esto ha implicado un cambio de modelo de política sindical. Desde entonces y hasta la actualidad el sindicalismo chileno se caracteriza por un modelo de centrales ideológicas en competencia por la adscripción de los sindicatos (no de los trabajadores, ya que los miembros formales de una central, federación o confederación son los sindicatos de empresa, no los trabajadores individuales), contándose a la fecha con la CUT, la CAT, la UNT, además de otros referentes más pequeños no afiliados a ninguna de las anteriores<sup>2</sup>.

Finalmente, el sindicalismo está deslegitimado ante sus bases y la sociedad. Esto es una consecuencia de liderazgos que fueron obsecuentes con el gobierno mientras gobernaba la centro-izquierda, y de una creciente percepción de ineficacia de su accionar. A ello se agrega negligencia en su gestión interna. Los principales líderes sindicales de la CUT han sido acusados de mala gestión financiera, incluyendo pequeños casos de corrupción, y favoritismo en la asignación de sus fondos a los miembros. Todo esto ha minado la confianza y reputación del sindicalismo.

En claro contraste con esta descripción, las organizaciones estudiantiles han sido capaces de acumular activos de influencia social durante las últimas dos décadas. Más adelante nos referiremos con mayor detalle a estos aspectos, aunque por ahora señalamos que estos recursos han permitido que el movimiento estudiantil responda con prontitud y eficiencia a las demandas de su base y a los desafíos que le ha impuesto el gobierno. Estos aspectos explican por qué ante abusos, agravios o injusticias de similar entidad, el movimiento estudiantil ha sido capaz de articular una respuesta de mayor envergadura que la que, hasta ahora, ha ofrecido el sindicalismo.

#### **4. Configuración del sistema político y oportunidades**

Los efectos de la configuración política local sobre el movimiento estudiantil de 2011 pueden ser reconocidos en dos planos temporales, que no obstante estar articulados, se distinguen

---

<sup>2</sup> Las características del modelo sindical nacional son tan peculiares que lo que en Chile llamamos sindicato, en la mayoría de países se denomina “comisión de fábrica” o “comisión interna”. En países con una institucionalidad laboral homologable a los estándares de la OCDE, el sindicato es la organización que representa a los trabajadores de una rama de actividad o sector. En forma sintética, las comisiones de fábrica o internas negocian al nivel del establecimiento de trabajo en cuestiones relativas, mientras que los sindicatos negocian los salarios para el sector.

analíticamente. Un primer plano se refiere a las características institucionales del régimen político que surge con la transición a la democracia. Las características institucionales son el reflejo del balance de poder entre oposición y dictadura al término de ésta. Así, el régimen político institucional que entra en vigor con las reformas constitucionales de 1989 se caracteriza por la instauración de contrapoderes ajenos a la voluntad popular (Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, no-subordinación de la comandancia de las fuerzas armadas al poder político); por la necesidad de conseguir súper-mayorías parlamentarias para emprender reformas sustantivas; y por un sistema electoral diseñado para evitar la conformación de dichas súper-mayorías (sistema binominal), penalizando a las fuerzas que compiten por fuera de las dos grandes coaliciones derivadas del clivaje del plebiscito de 1988. La arquitectura institucional sancionada durante el período transicional propiamente dicho (1987-1990), y que en lo sustancial no será modificada por los gobiernos civiles desde 1990, resulta prácticamente impermeable a las demandas de los grupos que no forman parte del pacto que da inicio a este régimen.

Un segundo plano se refiere a la alineación de los actores políticos en función de sus objetivos de corto y medio plazo. Aquí, el giro a la derecha, después de casi dos décadas de gobierno de la centro-izquierda, permitió que movimientos de protesta tradicionalmente encabezados por la izquierda extraparlamentaria contasen con nuevos aliados dispuestos a apoyar sus demandas. Éstas, a su vez, no eran especialmente novedosas, pero habían permanecido como ideas-fuerza circunscritas a actores extra-parlamentarios.

Numerosos intelectuales nacionales han observado que la restauración democrática en 1990 implicó un proceso de desmovilización de las organizaciones de la sociedad civil que fueron protagonistas, en las calles, de la lucha contra la dictadura. En efecto, la paz social (la ‘reconciliación nacional’) fue una de las prioridades del gobierno de Patricio Aylwin. Ello implicaba una agenda de reformas limitada, que dejaba fuera del debate político importantes asuntos incluyendo el orden constitucional, el sistema político institucional, y el sistema de relaciones laborales, entre otros de gran significación pues estuvieron al centro de las demandas de los partidos de la oposición durante la dictadura. Para los partidos de la Concertación por la Democracia, se trataba de dar señales de prudencia que mantuvieran la tranquilidad en las cúpulas militares y la derecha económica. Así, uno de los objetivos principales de los primeros gobiernos democráticos, al menos hasta la detención de Pinochet en Londres (1998), fue evitar la reedición de cualquier conflicto sobre asuntos fundamentales para la derecha.

Por una parte, la desmovilización fue un proceso deliberado. Esto implicó alinear las cúpulas de los partidos de la oposición a la dictadura con sus dirigentes en las organizaciones de base

que estuvieron a la vanguardia de las protestas populares de mediados de los 1980s, que forzaron una salida institucional. Hay evidencia que indica que los partidos implementaron mecanismos de disciplinamiento para conseguir la aquiescencia de sus miembros en los grupos de base (Oxhorn 1994). Por ejemplo, las políticas de vivienda social de los primeros gobiernos democráticos sancionaban negativamente a los grupos de pobladores más contestatarios (restándole puntaje en sus postulaciones colectivas a los subsidios a la vivienda) (Hipsher 1996). Por otra parte, procesos similares de desmovilización (caída pronunciada de la protesta política y predominio de la política institucional y de elites por sobre la política contenciosa y popular) se han verificado en otras transiciones políticas como la española, la argentina o la brasilera. Es un hecho que ningún ciclo de movilización puede sostenerse durante demasiado tiempo, especialmente si el motivo principal de la movilización ha desaparecido y si los niveles de participación y compromiso requerido han sido particularmente altos. El cambio de contexto político representaba, además, un desafío para organizaciones surgidas, casi literalmente, para el combate y la resistencia. Numerosos líderes de dichas organizaciones se transformaron en cuadros técnico-políticos de la nueva administración pública (estatal o municipal), sin verificarse un recambio generacional efectivo. La pérdida de recursos humanos y liderazgos en muchos casos dejó dichos grupos heridos de muerte. Esta fue una dinámica común tanto entre organizaciones sociales de base como entre grupos políticos de izquierda. Además, la década de 1990 se inicia con el derrumbe de los regímenes socialistas en Europa del Este. La centro-izquierda chilena entra al gobierno cuando el programa tradicional de la socialdemocracia experimenta una profunda transformación en la línea pro-negocios de la tercera vía del laborismo inglés y la agenda 2010 de la socialdemocracia alemana. Este contexto de derrota y reconversión al neoliberalismo representó en una pesada losa ideológica y moral para la izquierda, lo cual impactó decisivamente en el abandono y/o la cooptación de numerosos sectores militantes durante los primeros años de esa década.

En este cuadro generalizado de desmovilización, sin embargo, hubo excepciones: las federaciones estudiantiles (universitarias) y las organizaciones pro derechos humanos (especialmente las que representaban víctimas de la dictadura). Dichas organizaciones fueron capaces de articular una respuesta de oposición a las políticas de los gobiernos democráticos en sus respectivas áreas, conservando niveles apreciables de afiliación y representatividad aún en los momentos más difíciles. De hecho, no es casualidad que los dos ámbitos que están impulsando el cambio de período en la sociedad chilena en tiempos recientes sean precisamente el de los derechos humanos y la educación. Las organizaciones de víctimas de la dictadura se opusieron al particular balance entre justicia y pacificación que, se argumentó

entonces y ahora, requirió la transición para ser viable<sup>3</sup>. El amplio debate nacional abierto en torno a la conmemoración de los 40 años del golpe militar refleja hasta qué punto su actualidad en la formación del debate político sigue teniendo consecuencias. Pero este efecto no vino por defecto, como si 40 fuese un número mágico que desató fuerzas desconocidas. Al contrario, tal debate y sus implicancias reflejan las luchas persistentes de esas organizaciones y su influencia en los partidos y las instituciones.

Las federaciones estudiantiles han impulsado un período de movilizaciones casi cada año al inicio del período académico. La intensidad de estas movilizaciones ha variado, pero normalmente éstas adquieren mayor intensidad entre mayo y julio. De hecho, hasta el 21 de mayo de 2011, el ritual de movilizaciones y declaraciones protagonizado por los estudiantes se ajustaba al ritual conocido y repetido casi cada año. Cabe destacar que durante los 1990s, el sindicato de los profesores (Colegio de Profesores A.G.) también fue muy activo, encabezando campañas de movilización para mejorar su salario y estatus, muy dañados durante la dictadura. En gremio cuenta con una cierta tradición de organización y movilización, y en éste la izquierda (PC y otros) ha sido muy relevante en todo el período. En 1997, los estudiantes universitarios protagonizaron movilizaciones de envergadura entre mayo y julio, con numerosas universidades ocupadas por los estudiantes, incluyendo varias sedes de la Universidad de Chile y de Santiago, entre otras. En 2001, los estudiantes secundarios protagonizaron lo que se llamó el “mochilazo”, una serie de protestas de cierta significación en contra de las modificaciones a la prueba de admisión universitaria (PAA) y los precios del transporte público de los escolares. En 2006 las continuadas y masivas movilizaciones de los secundarios fueron las más grandes protestas de masas desde 1990. La llamada “revolución pingüina” puso en crisis al gobierno de Michelle Bachelet y le obligó a modificar su agenda (Donoso 2013). Aunque tuvo pocos efectos prácticos, el movimiento consiguió poner la problemática educacional como una prioridad nacional, lugar que no ha perdido desde entonces. De tal modo, las protestas estudiantiles de 2011 representan la continuación de antiguas demandas de universitarios y secundarios que no solo no habían sido satisfechas sino que además habían sido rehuidas por sucesivos gobiernos<sup>4</sup>. La insensibilidad acumulada de las instituciones a las demandas de los secundarios, contribuyó a agitar todavía más los ánimos en el sector (Grau 2011, Riesco 2012).

---

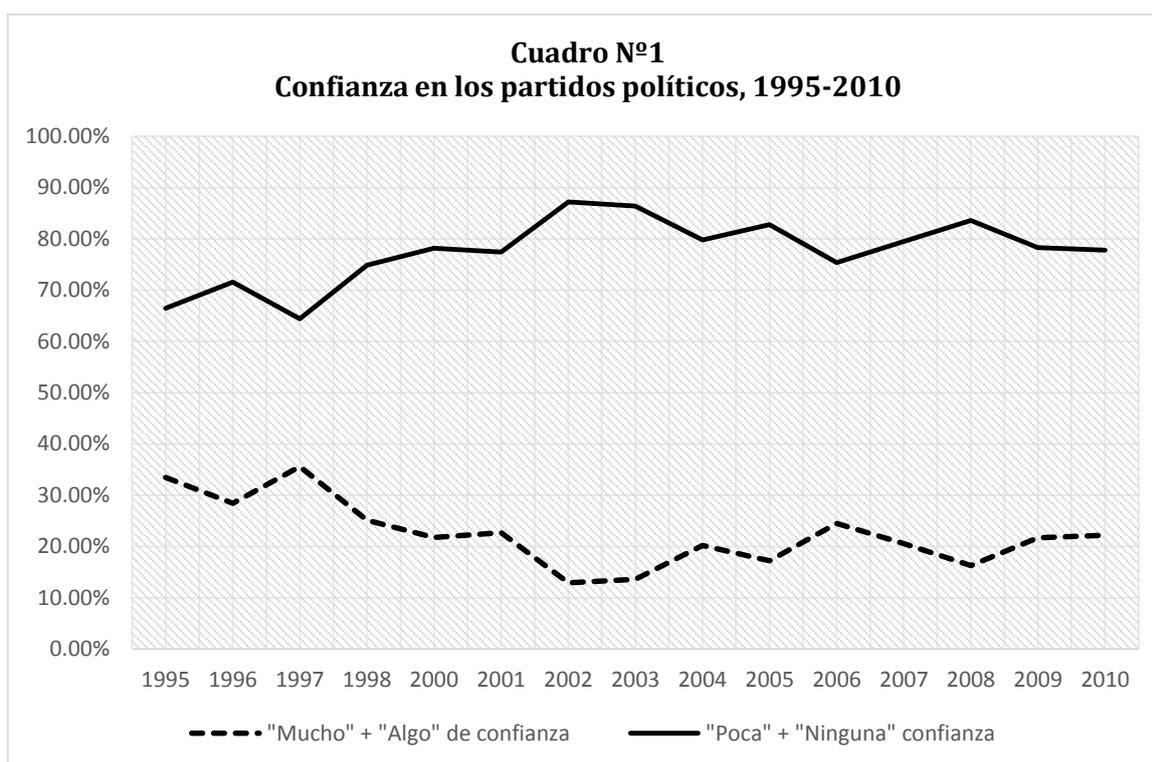
<sup>3</sup> La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 hizo evidente que uno de los acuerdos de los pactos de la transición decía relación con una limitada aplicación de la justicia en los numerosos casos de violación de los derechos humanos acaecidos durante la dictadura.

<sup>4</sup> Es interesante observar que la reforma a la LGE acordada en el gobierno de M. Bachelet, y que fue inmortalizada en la célebre fotografía de políticos de la concertación y la derecha “tomados de las manos”, fue vista por el movimiento estudiantil, especialmente el secundario, como una total desnaturalización de sus demandas originales. Las bases estudiantiles de los secundarios enmarcaron dicho evento como una traición del gobierno. Es evidente que esto, en parte, explica la mayor radicalidad de los secundarios en 2011 y la desconfianza ante cualquier posible acuerdo con el gobierno durante el conflicto.

El gobierno de Sebastián Piñera observó el movimiento con desdén. El gobierno creyó que las protestas se extinguirían pasadas unas pocas semanas, por lo que no se aplicó seriamente a encontrar una solución negociada. Este error de apreciación sería muy costoso. Cuando empezó a reaccionar, su respuesta fue defensiva, alternando el desprecio y la represión. En ningún momento el gobierno se apartó del guion que le dictaban sus convicciones más profundas, es decir, la creencia férrea en el subsidio a la demanda, la competencia, y el rol del sector privado. El propio presidente Piñera declaró que la educación era un bien de consumo (Radio Cooperativa, 19 julio 2011). Parece claro que el signo político del gobierno, su tozudez ideológica, contribuyó a encender todavía más los ánimos de los estudiantes y de sus aliados. En efecto, rectores, profesores e intelectuales sumaron su voz a los estudiantes ante la incapacidad del gobierno para ofrecer una solución que permitiera al menos combatir en forma efectiva el dolo de las universidades que, pese a que la ley lo prohibía, perseguían fines de lucro. El propio ministro de educación de la época, Joaquín Lavín, se vio obligado a renunciar a su cargo cuando los estudiantes denunciaron que había retirado su inversión de una conocida universidad privada ligada a su partido. Algunos observadores apuntaron que las bases de apoyo del movimiento estudiantil se ensancharon debido a la llegada de un gobierno de derecha. El giro a la derecha habría eximido de sus antiguos compromisos con el gobierno a una parte de los simpatizantes de la centro-izquierda. La amplitud alcanzada por el movimiento estudiantil en cuanto a sus respaldos, parece confirmar esta observación.

### **5. Opinión pública, democracia e instituciones**

Un argumento recurrente relaciona la emergencia y dimensiones de las protestas de 2011 con el socavamiento de la legitimidad de las instituciones, y la pérdida de confianza en partidos, gobierno, y otras instituciones. Según datos de la encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP), la proporción de quienes no se sienten identificados con los partidos subió del 52% en 2005 al 74% en 2010, un incremento de 22 puntos en sólo cinco años que implica que tres de cada cuatro chilenos no siente lealtad por ninguno de los partidos en oferta. Curiosamente, en 2011 la desconfianza en los partidos descendió ligeramente al 68% según la misma encuesta. El Latinobarómetro muestra un incremento menos radical, de 10 puntos, de la desconfianza hacia los partidos políticos desde los 1990s, como se puede apreciar en el cuadro N° 1.



Fuente: Latinobarómetro.

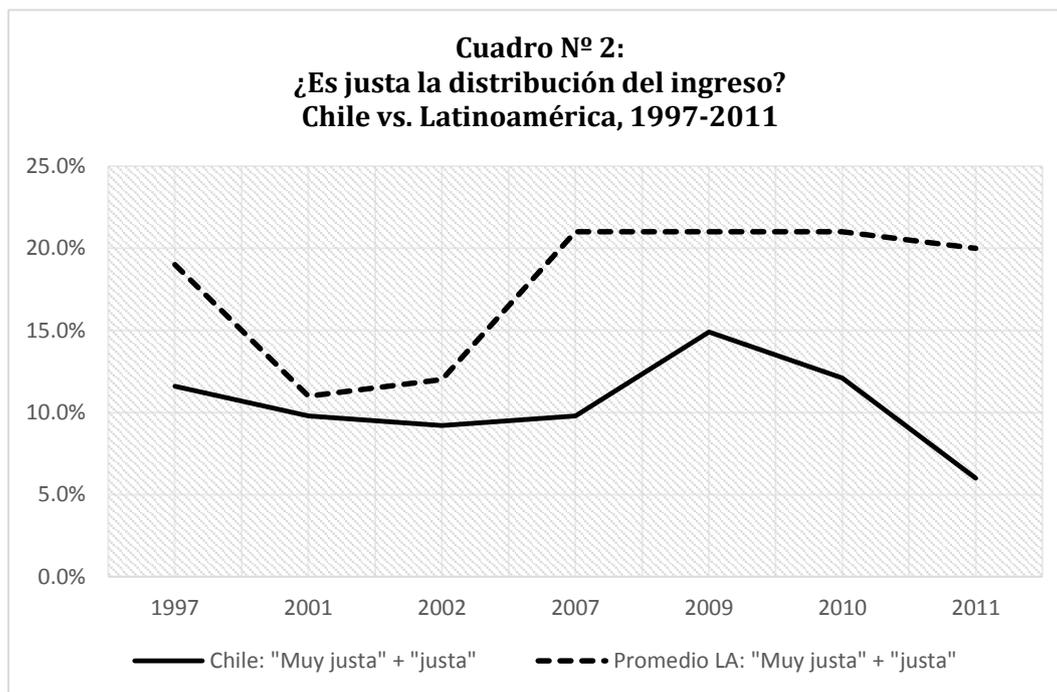
En el cuadro N° 1 se observa que la desconfianza, ya considerable en los 1990s, subió desde un 69% de a un 81% en la primera mitad de la década siguiente. El promedio del período 2005-2010, 79,5%, es prácticamente similar al del quinquenio anterior. En general, se aprecia que (a) durante la última década la desconfianza se ha mantenido constante, con ligeras variaciones, aunque siempre en niveles apreciables; y que (b) no hubo un cambio brusco de tendencia que precediera los eventos de 2011. De acuerdo a los datos de la encuesta de la UDP, sólo un 11% confiaba mucho en los partidos políticos en 2010, un 7% en 2011 y un 4% en 2012. El desplome en el porcentaje de confianza en los partidos se puede explicar como un efecto de las movilizaciones –el trabajo de campo de la encuesta UDP de 2011 se efectuó en septiembre de ese año, cuando el efecto de las grandes movilizaciones ya era evidente–, y no como una causa que le antecediera. En principio, se puede argumentar que la falta de confianza en los partidos puede predisponer a explorar canales alternativos de incidencia política. Pero para que eso ocurra, son necesarios mecanismos que transformen la desconfianza en participación. Un incremento de la desconfianza en los partidos u otras instituciones bien podría conducir al retraimiento. La desconfianza, por sí sola, no es capaz de explicar el advenimiento de un ciclo de protesta. Argumentamos aquí que la desconfianza en los partidos y otras instituciones del sistema político es una condición necesaria pero no suficiente para revertir en masivas protestas callejeras. Y que para que esto ocurra se requiere de recursos organizacionales, motivaciones, y pertenencias (*embeddedness*) a redes sociales que movilicen a los desencantados a las calles.

Otro argumento recurrente para explicar las grandes protestas del 2011 sugiere que los movimientos sociales serían una reacción frente a la desigualdad. El cuadro N° 2 muestra la trayectoria de las percepciones sobre la desigualdad entre 1997 y 2011. Se observa que la percepción de justicia distributiva es muy baja. En el contexto latinoamericano, Chile se encuentra en el grupo de países con baja percepción de justicia distributiva, con unas cifras por debajo de la media latinoamericana. Aproximadamente, sólo un 10% considera justa la distribución de la riqueza. La percepción de injusticia (entre un 88% y un 91%) se ha mantenido constante en esos niveles desde la década del noventa. Entre 2007 y 2009 se observa un repunte de la percepción de justicia en los ingresos (un 15% la consideró justa), pero al año siguiente cae nuevamente, desplomándose en 2011 definitivamente: en un año, quienes consideraban justa la distribución de la riqueza cayeron desde el 12% al 6%. Cabe resaltar que los datos de Latinobarómetro fueron recogidos entre el 15 de julio y el 16 de agosto de ese año, cuando el efecto de las movilizaciones en la opinión pública ya era ostensible. Por lo tanto, el desplome de 2011 ocurre como *efecto de las movilizaciones sociales, y no es una causa de ellas*. Además, es interesante notar que la percepción sobre la distribución del ingreso en Chile mejora en medio de la crisis mundial de 2008, y empeora cuando el país registra alto crecimiento económico, durante la administración de Piñera (2010-2013). Esto sugiere que los cambios en la percepción sobre la desigualdad de la riqueza no dependen exclusivamente del ciclo económico sino que también de variables políticas.

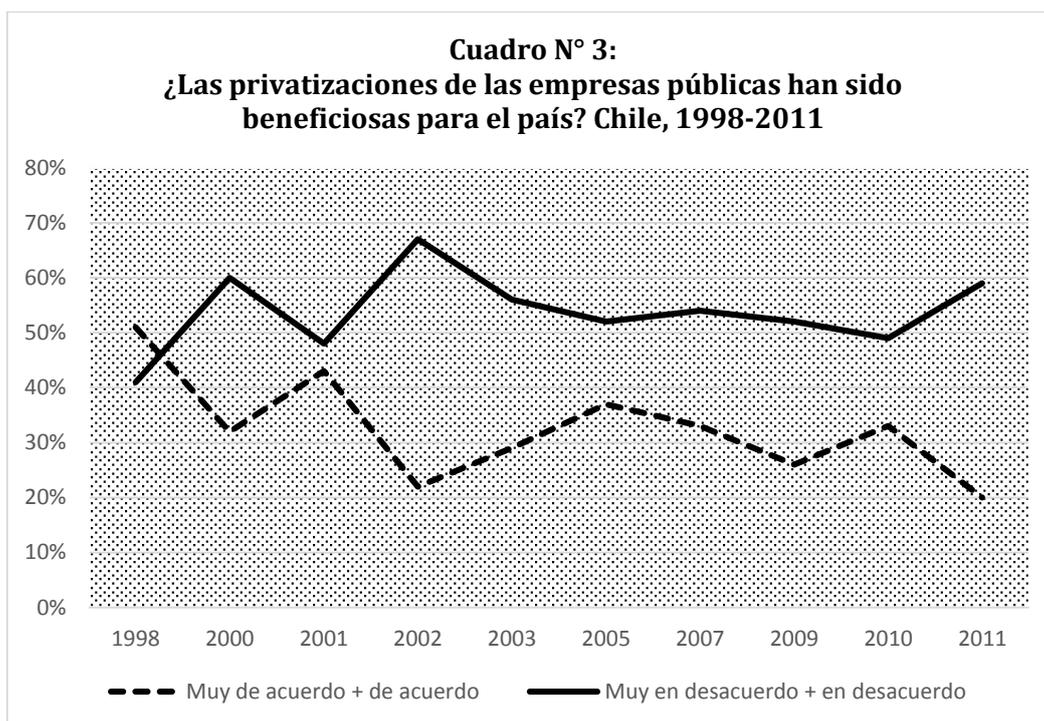
La insatisfacción con las reformas neoliberales puede observarse en la percepción sobre las privatizaciones de empresas públicas, una de las medidas más representativas de dicho giro en las políticas económicas. A las privatizaciones del sistema de pensiones y la apertura a los servicios sanitarios privados (AFPs e Isapres), la minería no cuprífera (SOQUIMICH), y la empresa del azúcar, entre otras, durante el régimen de Pinochet, se agregaron en los 1990s la privatización total de los servicios telefónicos (ENTEL y CTC), las empresas sanitarias y eléctricas, la infraestructura portuaria, entre otras<sup>5</sup>. Como lo indica el cuadro N° 3, durante toda la primera década de 2000, quienes consideran que las privatizaciones no fueron beneficiosas superan el 50% del total (con excepción de 2001), y desde 2001 el porcentaje de quienes las consideran beneficiosas se encuentra consistentemente por debajo del 40%. Aunque en 2010 se observa un repunte de la percepción beneficiosa, la que llega al 33%, en 2011 vuelve a bajar al 20%.

---

<sup>5</sup> Una medida de la magnitud del programa de privatizaciones iniciado en 1974 la ofrece Hachette (2003). Este autor calcula que en 1981 el 81% de la producción minera, el 12% de la industria y el 75% de los servicios eran producidos por empresas públicas. En 1998, la participación pública cayó a un 45% en la minería, un 3% en la industria y un 20% de los servicios públicos.



Fuente: Latinobarómetro.

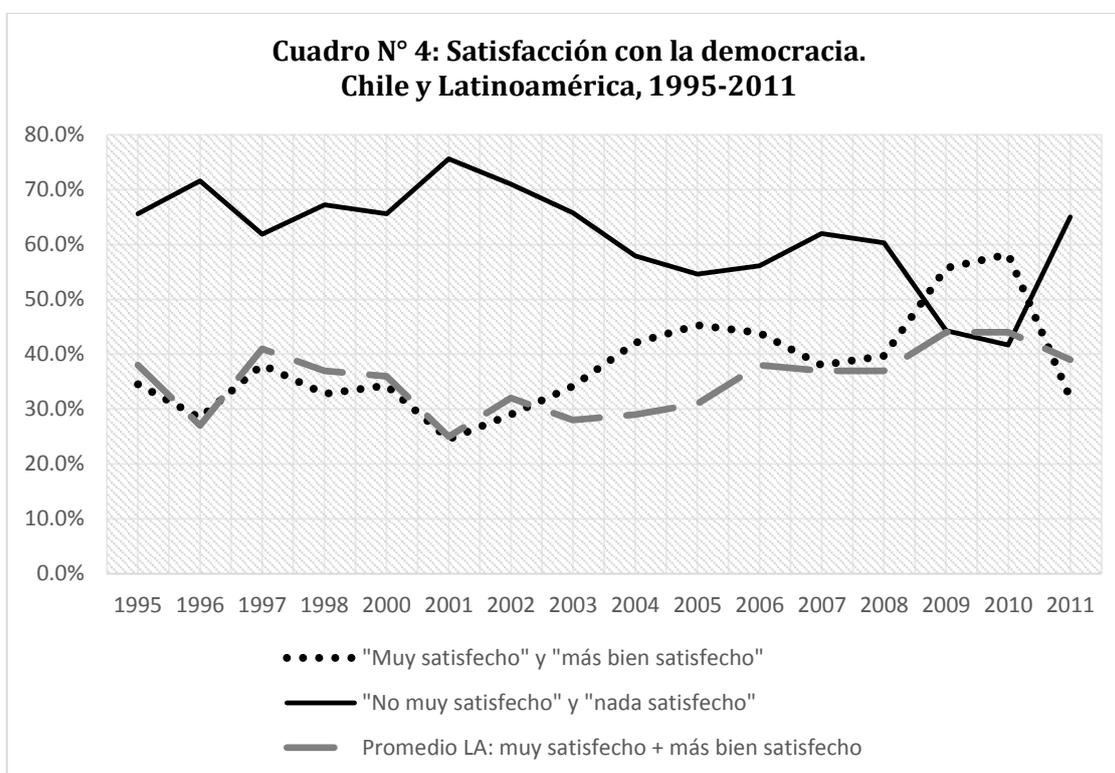


Fuente: Latinobarómetro.

También se ha sugerido que el colapso de legitimidad de las instituciones políticas estaría detrás de la irrupción del movimiento estudiantil en 2011. Este argumento suele complementar las ideas debatidas en párrafos anteriores. En realidad, como lo indica el cuadro N° 4, los niveles de satisfacción con la democracia venían subiendo desde 2001, llegando en 2010 a uno de sus máximos históricos. Además, desde principios de la década los

niveles de satisfacción con la democracia son ligeramente más altos en Chile que el promedio latinoamericano. En 2009 los satisfechos (55%) superan por primera vez a los insatisfechos (44%), y en 2010 la diferencia entre ambos se agranda: 58% de satisfacción vs. 41% de insatisfacción. Pero en 2011, los niveles de satisfacción con la democracia en Chile (32%) caen por debajo de la media latinoamericana (39%), mientras que la insatisfacción se instala en el 65% de la población, más de 24 puntos porcentuales por encima de la satisfacción.

Reiteramos aquí algo destacado previamente: la recogida de datos tuvo lugar entre en julio y agosto de ese año, cuando las movilizaciones estaban en pleno apogeo y la legitimidad de las demandas estudiantiles en su punto más alto. Por eso reiteramos que el *desplome de los niveles de satisfacción con la democracia es efecto de las movilizaciones sociales y no su causa*. En este aspecto, el efecto de las movilizaciones de 2011 es subversivo, por cuanto reemplaza una narrativa por otra.



Fuente: Latinobarómetro

En su conjunto, los datos muestran que las movilizaciones de 2011 cambiaron la percepción de los chilenos en algunas materias, y agudizaron la percepción negativa en otras donde la percepción ya era mayoritariamente mala. Esto fue posible en la medida que el reclamo señalado por los estudiantes daba coherencia a percepciones consolidadas durante la primera década de 2000, en cuanto a la injusticia en la distribución de los ingresos, una visión mayoritariamente negativa sobre los beneficios de las privatizaciones realizadas en los 1980s y 1990s, y un prestigio menguante de los partidos políticos. Aunque estos factores no

experimentan variaciones en el período directamente anterior al inicio de las movilizaciones, eso no significa que no hayan jugado un rol en la generalización de las demandas de los movimientos sociales. En general, estos factores parecen ser necesarios pero no suficientes por sí solos para generar el gran estallido de 2011. Ellos deben interactuar con otras dimensiones para configurar determinados resultados en términos de pautas de movilización. La amplia resonancia del reclamo igualitarista y distributivo de los estudiantes tuvo lugar en un contexto de percepciones negativas ya asentadas sobre la distribución de la riqueza y el funcionamiento de las instituciones. Pero la característica distintiva de los movimientos sociales de 2011 es que transformaron percepciones en rechazo activo. Las opiniones sobre la justicia y la riqueza se transformaron en un reclamo político, y los estudiantes se convirtieron en los voceros de ese reclamo.

### **6. Movilización social y participación.**

Con respecto a las formas no convencionales de participación política, hay evidencia que indica que ésta prosperó desde la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. De acuerdo a datos de Carabineros de Chile (2011), ya en 2010 hubo un incremento del 50% en la frecuencia de eventos de orden público<sup>6</sup>, y de un 130% en el número de participantes en dichos eventos, con respecto a 2009. Estos datos contradicen una percepción relativamente difundida en el país, de que el terremoto y maremoto de febrero de 2010, solo días antes de que Bachelet entregara el poder a Piñera, habrían reducido sensiblemente la disposición de la población para protestar. En 2011, a su vez, el incremento de la protesta fue espectacular: el número de eventos fue un 188% más alto y el número de participantes un 292% superior a los registrados el año anterior (Carabineros de Chile, 2011). Según Carabineros, en 2011 casi 2 millones de personas participaron de poco más de 5.900 “eventos de orden público”, los que se saldaron con más de 16 mil detenidos. De estos datos se puede concluir al menos dos observaciones. Primero, el movimiento estudiantil, y los movimientos de protesta de 2011 representan sin lugar a dudas una ruptura de tendencias precedentes en lo que se refiere a la intensidad de la protesta social. En segundo lugar, la tendencia de ascenso en la frecuencia y número de participantes en eventos de protesta entre 2009 y 2011, confirman que el cambio de signo del gobierno aumentó la participación política no convencional. Por tanto, es un hecho que la llegada de un gobierno de derechas tuvo un rol acelerador en el incremento de la participación política extra-institucional.

Los movimientos estudiantiles universitarios han sido tradicionalmente un vehículo de expresión política de sectores medios. Lo fueron de hecho en los grandes movimientos de los años 1920s y 1960s (Cifuentes, 1997; Gazmuri, 2001; Moraga, 2007). ¿El movimiento de 2011

---

<sup>6</sup> Por “eventos de orden público”, Carabineros entiende manifestaciones, marchas, ocupaciones y desorden (barricadas, etc.).

fue una protesta de clases medias inquietas por unas deudas en aumento y unas credenciales devaluadas? Si se observa con atención a la composición del movimiento, queda de manifiesto un componente popular que ha sido oscurecido por una narrativa generalizada sobre una clases medias globales en alza<sup>7</sup>, que ha tenido un correlato nacional (e.g. Elacqua 2012; Navia 2012a y 2012b). La participación de estudiantes de establecimientos de las comunas populares, ofrece una medida aproximada de hasta qué punto el movimiento estudiantil de 2011 rebasó los límites de sectores medios consolidados. Para ello, hemos utilizado una base de datos construida por el propio movimiento estudiantil durante ese año<sup>8</sup>. Aunque esta base de datos no es exhaustiva ni fue elaborada con criterios metodológicos de investigación, ofrece información valiosa para indagar en las características y composición del movimiento estudiantil de ese año. Con base en datos sobre los establecimientos educativos movilizados al mes de septiembre de ese año (cuando el zenit de las movilizaciones ya había pasado, pero aún permanecían en alto), se puede observar que sólo en Santiago hubo 126 escuelas secundarias participando de las movilizaciones ya fuera ocupadas por sus estudiantes (toma), en paralización de actividades (paro), en actividad normal pero con horarios especiales (para permitir la participación de estudiantes en marchas y manifestaciones), o bien desalojadas por la fuerza pública. Para distinguir la participación de alumnos de sectores populares en el movimiento, hemos calculado la proporción de liceos de Santiago movilizados, excluyendo a los establecimientos de las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, donde se encuentran los denominados ‘liceos emblemáticos’ y las instituciones particulares privadas, que son los sitios donde las clases medias y altas suelen enviar a sus hijos. El ejercicio muestra que un 77% de las instituciones secundarias participando activamente del movimiento se localizan en comunas típicamente de clases medias y medias bajas. Se trata de áreas de la ciudad donde habitan familias situadas sobre la línea de pobreza, pero cuya estabilidad económica puede variar con ligeros cambios en la situación del mercado de trabajo o con situaciones imprevistas en el núcleo familiar (enfermedad catastrófica de un miembro, desaparición de uno de los ingresos del núcleo familiar). Además, la participación en las regiones fue notoria y significativa. Según la misma base de datos, 92 de los 217 establecimientos secundarios movilizados en septiembre de 2011 pertenecían a regiones, un 42% del total. Hay numerosa evidencia en la prensa que indica el involucramiento de liceos técnicos profesionales de comunas populares (El Ciudadano, 2011), especialmente en ciudades de provincia. Por

---

<sup>7</sup> En el contexto chileno, en principio cabría distinguir entre las clases medias consolidadas surgidas de la expansión del estado y la progresiva masificación del sistema educativo hasta 1973 (cuyas pautas residenciales coinciden con las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, y otras del sector oriente de la capital), de las clases medias surgidas a partir de las reformas de la dictadura y cuyos niveles de consolidación en las posiciones sociales adquiridas es todavía bajo.

<sup>8</sup> La base de datos surge de un esfuerzo de los propios estudiantes por mantener un catastro de colegios y universidades movilizados, y fue puesta a disposición en la web [www.movilizados2011.tk](http://www.movilizados2011.tk). Esta base de datos está a disposición de quien la solicite al autor de este artículo.

ejemplo, de acuerdo a reportes de prensa, sólo en la comuna de Concepción 14 colegios estaban ocupados por los estudiantes en el mes de agosto, mientras que 11 colegios de la 4<sup>o</sup> región estaban en la misma condición. De hecho, el involucramiento de estudiantes provenientes de muy diversos estratos sociales permite explicar los altísimos niveles de aprobación en la opinión pública que consiguió el movimiento estudiantil. Aunque los líderes estudiantiles de las universidades tradicionales (PUC y UCH) y los colegios emblemáticos (Instituto Nacional, Liceo 1, etc.) gozaron de mayor visibilidad en los medios, la participación en el movimiento de universidades privadas y públicas no elitistas –en los que el peso de estudiantes de comunas populares es significativo– (Fleet, 2013) y de colegios no-emblemáticos, revela la significativa presencia de sectores que no pueden ser asimilados a sectores medios altos necesariamente.

### **7. Cultura política e identidades como recursos de la acción colectiva contenciosa**

La presencia de fuertes culturas de oposición en el movimiento estudiantil es un rasgo persistente a lo largo de la historia contemporánea del país. Desde los años 1920s, pero con especial fuerza durante los 1960s y hasta 1973, los partidos de izquierda reclutaban nuevos miembros con especial facilidad entre la población estudiantil. Las ramas juveniles de los partidos de la izquierda fueron, en la práctica, fábricas de líderes políticos. Esta práctica de reclutamiento de activistas y líderes y de socialización política del estamento estudiantil sobrevivió a la dictadura. Las universidades se transformaron en un frente de oposición al régimen de Pinochet (Muñoz 2006; 2011). La politización de la juventud alcanzaba también a las escuelas secundarias, en particular aquellas más antiguas o con cierta tradición (por ejemplo, los colegios públicos más prestigiosos en cada ciudad). Tanto los liceos públicos hoy llamados “emblemáticos” como las universidades, han sido durante casi todo el siglo XX lugares de reproducción de las clases medias. En esa calidad, han sido también espacios de socialización política del sector. Durante los 1980s, los estudiantes secundarios fueron protagonistas de ocupaciones de liceos y movilizaciones que contribuyeron a crear un clima de enfrentamiento con el régimen, las que pasaron a formar parte de la memoria colectiva de una generación que se inició a la política en un contexto de lucha y represión estatal.

Durante los años 1990s, las agrupaciones estudiantiles no escaparon de los efectos de la crisis de las organizaciones sociales que se implicaron en la lucha anti dictatorial. De hecho, durante toda esa década los estudiantes secundarios se mantuvieron en relativa calma, sin protagonizar eventos significativos de protesta. La organización de representación de los estudiantes secundarios más importante, la FESES, desapareció en ese período, pero los centros de alumnos en muchos liceos permanecieron. Precisamente a partir de éstos se logró reconstituir una nueva organización a fines de esa década, pero la nueva FESES tuvo corta

duración y terminó disolviéndose debido a diferencias políticas internas. A principios de la primera década de 2000s, nuevas agrupaciones estudiantiles surgieron a partir de conflictos donde se visibilizaban diferentes posturas hacia la autoridad. Si en el pasado las juventudes de los partidos tradicionales fueron relevantes en este ámbito, en los 1990s y 2000s la única rama juvenil presente en la política de los secundarios fueron la Juventudes Comunistas (JJCC). Otros agrupamientos ideológicos, más o menos difusos o consolidados, ganaron relevancia y desplazaron a los partidos tradicionales. La fortaleza acumulada por estas organizaciones se hizo visible para el público con ocasión de las grandes movilizaciones de los secundarios de 2006, conocido como movimiento de los pingüinos. Nadie pudo prever el estallido social de los secundarios, quienes protagonizaron las movilizaciones más extensas de la post-transición, hasta ese momento (Donoso 2013). Gracias a esas movilizaciones, la cuestión del sistema educativo se transformó en un tópico estructurante del conflicto político en el país, y la demanda por una educación gratuita, hasta entonces un reclamo de facciones minoritarias dentro del movimiento estudiantil, quedó instalada como una de las más importantes. Además, el desarrollo y desenlace de ese conflicto quedarán en la memoria del movimiento de los secundarios, jugando un papel también en el movimiento de 2011.

Un panorama más o menos similar, pero que pudo resolverse más tempranamente, tuvo lugar en la política estudiantil universitaria. La crisis organizativa se sintió con más fuerza a mediados de los 1990s, uno de cuyos símbolos fue la disolución de la FECH (la federación más importante del país) debido a un escándalo de corrupción e instrumentalización política. Sin embargo, ésta pudo ser revertida exitosamente en poco tiempo (Roco, 2005). Así, en 1997 se verificó una importante ola de movilizaciones estudiantiles, que se prolongó durante varias semanas, con participación relevante de universitarios de los centros más importantes. Hasta fines de los 1990s los partidos tradicionales que formaban parte de la coalición de centro-izquierda en el gobierno tuvieron cierta relevancia en las federaciones universitarias. Pero precisamente a partir de la refundación de la FECH, su relevancia comenzó a menguar progresivamente, desapareciendo de muchos lugares donde su presencia había sido tradicionalmente fuerte. De hecho, los partidos de la concertación dejaron de competir bajo la marca “concertación” o con sus propios nombres en las elecciones estudiantiles desde mediados de los 1990. Hasta 2011, de los partidos tradicionales, el único con presencia efectiva a nivel nacional en casi todas las federaciones estudiantiles más grandes fue la JJCC. En este período otras agrupaciones de izquierda comenzaron sus andaduras en la política estudiantil, entre ellos uno de los más destacados es la Surda –hoy “movimiento autónomo”. Durante la primera década de 2000, los autónomos han sido capaces de liderar universidades de Santiago y regiones (aunque en Valdivia han sido fuertes por largos años desde los 1990s) (Carrasco, 2010). En la segunda mitad de este década, la mayoría de los partidos o agrupaciones de la izquierda, desde el Partido Comunista (vía la JJCC), incluyendo el Partido

Igualdad, el movimiento Autónomo, y otros grupos menores, cuenta con incidencia y presencia efectiva (pero variable) en los campus universitarios. El liderazgo por parte de grupos moderados o de derecha ha sido circunstancial (por ejemplo, alguna vez un grupo de derecha consiguió ganar la FECH, favorecido por la dispersión del voto generada por múltiples listas de izquierda que competían por un mismo votante), con la notable excepción de la Universidad Católica donde la presencia del movimiento gremialista (derecha) ha sido significativa desde su origen en los 1970s. Sin embargo, su tradicional predominio en las elecciones de federación de los 1990s comenzó a ser desafiado exitosamente en la década siguiente por un nuevo referente de carácter progresista, el NAU (Nueva Acción Universitaria). Éste, aunque está conformado por personas que han militado en los partidos de la centro-izquierda, agrupa mayoritariamente a independientes. Por tanto, aunque es un referente más moderado si se le compara con otras agrupaciones de izquierda surgidas en las últimas dos décadas en otras universidades, no responde al formato típico de “juventud de partido” que predominó hasta los 1990s en esa universidad y la política universitaria en general.

Otro elemento cuya influencia parece significativa dice relación con una diferencia generacional que distingue tanto a los liderazgos como a sus bases, sobre todo desde mediados de la década de 2000s (Muñoz 2012; Aguilera 2014). Las generaciones más recientes parecen haberse sacudido de parte de los traumas que aquejaron a las generaciones precedentes, especialmente la de los 1990s. Ésta se encontraba limitada por dos grandes losas. Por una parte, la narrativa oficial sobre la transición política condenaba el radicalismo como una causa del quiebre de 1973. Numerosos ‘enclaves autoritarios’ y la presencia física de Pinochet al mando del ejército y luego como senador designado, daban sustento a la idea de fragilidad de las nuevas instituciones. Por otra parte, la izquierda radical cargaba con el estigma de la derrota de su proyecto político, lo que llevó a muchos al retraimiento o la radicalización en torno a grupos muy herméticos. Las generaciones posteriores no vivieron estos ambientes ni se socializaron en torno a estos traumas. Esto les habría permitido enfrentarse al poder político y plantear demandas en modos más radicales. Por ejemplo, durante los 1990s la izquierda universitaria proponía un sistema de financiamiento estudiantil de aranceles contingentes a los ingresos del hogar (quien gana menos, paga menos). En los 2000s, esta demanda fue abandonada y mayoritariamente se abrazó la demanda por educación gratuita. Un gran rol en este cambio provino del movimiento de los pingüinos de 2006. Es significativo que esta evolución fue encontrando respaldo progresivo por parte de la opinión pública, lo que también demuestra la capacidad de persuasión de los movimientos sociales, en procesos que son relativamente lentos.

En resumen, el movimiento de 2011 tiene antecedentes en conflictos precedentes y soporte en organizaciones representativas de los estudiantes, que han sido el reservorio de una memoria de activismo que conecta a los estudiantes con una historia de lucha por valores como la igualdad y la democracia. Las organizaciones que impulsaron y gestionaron las movilizaciones, desde sus bases en las escuelas y facultades, han estado presentes en los ámbitos estudiantiles desde hace muchos años. Las organizaciones estudiantiles, por su historia antes y durante la dictadura, cuentan con una identidad evidentemente progresista, representando tradicionalmente ideas de avanzada en un amplio abanico de materias, incluyendo cuestiones políticas. Las universidades y muchos liceos públicos han sido tradicionalmente espacios de socialización política donde las ideas de la izquierda, en un sentido amplio, han tenido gran difusión. En esos espacios, las agrupaciones de la izquierda han sido fuerzas preponderantes, desafiando la crisis de principios de los 1990s y los reveses de las movilizaciones de 1997 y 2006 (éstas no lograron detener la privatización y financiarización del sistema educativo). Sin la presencia de estas organizaciones y las redes que se movilizaron a partir de ellas, el movimiento estudiantil de 2011 no habría podido despegar ni alcanzar las dimensiones que tuvo.

### **8. La larga duración (*longue durée*) y el proceso político**

Una perspectiva de larga duración sugiere que similares procesos globales están detrás de fenómenos diversos de contestación política en diversos contextos nacionales (Silver 2003). En un intento por reflexionar sobre las bases sociales que podrían sostener una crítica consistente o al menos desestabilizar el capitalismo del siglo XXI, tal como lo hizo la clase obrera desde fines del siglo XIX hasta la década de 1970, Therborn (2014) sugiere que deberíamos dirigir nuestra mirada hacia cuatro capas o grupos sociales. El primero, las sociedades precapitalistas que se resisten a ser incorporadas a la modernidad capitalista (por ej., en los países andinos en América Latina). Segundo, las masas 'excedentes' excluidas del empleo formal en los circuitos dinámicos de la economía. Tercero, los trabajadores explotados en la industria tanto en áreas en desindustrialización como en aquellas en auge. Y cuarto, las nuevas y viejas clases medias que con frecuencia soportan una pesada deuda a consecuencia de la financiarización creciente de la economía. Asimismo, Therborn señala que los tópicos alrededor de los cuales podría desarrollarse la crítica al capitalismo actual incluyen las amenazas a la cohesión social y a la sostenibilidad ambiental inscritas en la mercantilización sin límites; y la crítica a la sociedad de consumo, ya sea en su versión post-materialista Nor-atlántica o su versión postcolonial en el sur global. Visto a través de estas coordenadas, las grandes protestas de 2011 en Chile son una consecuencia de la mercantilización de amplios sectores previamente protegidos por leyes o convenciones sociales. El paradigma neoliberal implica la conversión al mercado de bienes públicos, comunitarios o de derechos sociales, un programa llevado a la práctica tempranamente en el

país. Los estudiantes, y otros sectores, resistieron esta tendencia desde muy temprano<sup>9</sup> denunciando los peligros que la mercantilización implicaba para la cohesión y la igualdad, pero el movimiento de 2011 ha sido su paso más exitoso en esa dirección desde la restauración de la democracia en 1990.

Si se le compara con otros movimientos de protesta en Europa y Estados Unidos ocurridos a partir de la crisis financiera de 2008, el movimiento estudiantil chileno se distingue de ellos por el contexto en el que tiene lugar (Somma 2012), como por su composición (Guzman-Concha 2013). El movimiento estudiantil chileno –y los movimientos sociales de 2011–, no surgen en un contexto similar de crisis económica y recortes generalizados. Además, en Chile los principales articuladores de la protesta fueron organizaciones estudiantiles tradicionales muy arraigadas, mientras que en Europa y Estados Unidos se trata de un mix heterogéneo de pequeños grupos de jóvenes, de clase media, conectados entre sí a través de redes más o menos estables. La simultaneidad de indignados, *Occupy* y Primavera árabe les benefició en la medida que los activistas locales fueron capaces de conectar sus demandas y descubrir similitudes (Flesher Fominaya y Cox 2013 < Tripp 2013). Sin embargo, estos esfuerzos no siempre garantizan mayor resonancia y legitimidad. Por ejemplo, se ha observado que el marco del movimiento alter-globalización de los 1990s no resonaba bien en los contextos de clase obrera, o en los de países no insertos en la primera ola de protestas alter-globalización, como Europa del Este o Latinoamérica (Gagyí, 2012). Cabe agregar también que los movimientos de 2011 no podrían ser inscritos fácilmente en la categoría de los “nuevos movimientos sociales”, pues no representan un cambio de eje desde demandas materialistas a cuestiones post-materialistas. No hay quiebre o surgimiento de un nuevo clivaje de conflicto social (post-materialismo). Los movimientos estudiantiles (también los movimientos regionales en el extremo sur y norte del país) son eminentemente distributivos. Por tanto, los movimientos sociales de 2011 representan una pauta más bien clásica de conflicto político.

Sin perjuicio de estas características de continuidad, en el contexto de la historia reciente del país el movimiento estudiantil sí que inaugura un cambio de tendencia. Las movilizaciones sociales de ese año fueron capaces de: (1) cambiar el estado de la opinión pública en materias de alta relevancia; (2) romper con el ciclo político precedente, creando un nuevo escenario de oportunidades de influencia para actores no tradicionales, excluidos de las elites surgidas del pacto de la transición a la democracia de fines de los 1980s; (3) impulsar un cambio drástico de agenda que todavía (tres años después) tiene vigencia; y (4) provocar la primera y más

---

<sup>9</sup> En la segunda mitad de los 1990s, los estudiantes se movilizaban contra los intentos de bancarizar la deuda por concepto de aranceles. Este fue uno de los temas en conflicto durante la ola de protesta de 1997.

consistente amenaza a la hegemonía de dichas elites desde 1990. Estos efectos han abierto el tablero del poder, imprimiendo dinamismo e incertidumbre al período actual. La naturaleza de las demandas que los estudiantes han puesto sobre la mesa cuestionan directamente los viejos equilibrios del sistema de poder surgido con la transición a la democracia (Jara 2014; Mayol 2012). Los estudiantes abrieron una caja de pandora, haciendo emerger viejos temores que se creía ya conjurados: por ejemplo, el temor a volver a la “polarización de los 1960s” y a discutir otra vez sobre proyectos de sociedad (Büchi 2013; Soto 2013). Con todo, no es posible hacer todavía un balance general de los efectos de las movilizaciones de 2011. Si sus efectos políticos y sociales han sido notables y persistentes, en el ámbito de las políticas públicas estos han sido escasos, hasta ahora.

## 9. Conclusiones

En Chile y otros países, los movimientos estudiantiles han sido, históricamente, una fuerza de cambio político. Los estudiantes son numerosos y su coordinación no es demasiado compleja, especialmente cuando organizaciones fuertes y legitimadas son conducidas por líderes carismáticos y bien preparados. Internet y las redes sociales facilitan su coordinación y la difusión de eventos de protesta, pero no explican ni la magnitud ni el momento de la irrupción del movimiento estudiantil (y agrego, de cualquier otro movimiento social masivo). Otras explicaciones para este fenómeno de masas, en mi opinión, no logran conectar el plano de lo estructural con el plano de los factores desencadenantes, y oscilan entre atribuir todo el peso de la explicación a uno u otro aspecto considerado en forma aislada. La gravedad o persistencia de un agravio sustentado en un proceso estructural no explica el *timing* ni las dimensiones de una movilización popular. Estos señalan los asuntos de conflicto político potencial. Del mismo modo, la impericia de conducción política de un gobierno, o la repentina irritación de los ciudadanos, no dicen nada sobre los mecanismos que llevan de la indignación a la protesta callejera. Este artículo ha sugerido que la configuración histórica de las organizaciones de acción colectiva –su identidad, recursos organizativos, liderazgos, memorias colectivas– permite establecer una conexión entre ambos planos analíticos.

En términos generales, he argumentado aquí que para entender este fenómeno en 2011 en Chile, tenemos que observar en forma combinada la interacción de (a) agravios de larga duración en el sistema educativo; (b) instituciones políticas cerradas, incapaces de incorporar nuevas demandas o nuevos actores en los procesos de deliberación; (c) un tejido organizacional fuerte y consolidado en el ámbito estudiantil, que incluye (d) líderes nacionales e intermedios preparados, legitimados en sus bases; y además incorpora (e) identidades políticas capaces de reproducir y proyectar valores contraculturales (por ej., oposición, solidaridad, igualitarismo, etc.). Estas dimensiones se combinaron con factores desencadenantes particulares: (a) un gobierno de derechas que permitió que el movimiento

estudiantil se hiciera de influyentes y numerosos aliados; (b) que demostró impericia en la conducción del conflicto, empezando por sus respuestas alineadas a la ortodoxia neoliberal, diametralmente opuestas a las demandas estudiantiles; (c) lo que, combinado con la estrategia represiva ensayada en una segunda fase, contribuyó a polarizar el cuadro. Esto fue en beneficio del movimiento estudiantil, y contribuyó a acelerar el desplome de popularidad del gobierno y el presidente.

Estos factores combinados provocaron un movimiento social de gran envergadura que es parte de procesos globales, aunque conserva rasgos distintivos en cuanto a su naturaleza y causas. Las protestas de 2011 se distinguen por su *magnitud, intensidad y duración* en el tiempo. De estas tres cualidades han dependido sus impactos. Como se ha argumentado previamente, no son protestas que surgiesen de la nada, como un campo de flores en el yermo. Los estudiantes universitarios y secundarios tenían experiencias de movilización más o menos exitosas en el pasado reciente. Las demandas, por su parte, tampoco eran nuevas, puesto que ya habían sido puestas en escena en años precedentes. Lo distintivo de las demandas de 2011 es que tuvieron la capacidad de generalizarse con relativa rapidez, puesto que conectaron con tendencias más profundas y generales de la sociedad chilena. A saber, la constante preocupación por la injusticia en la distribución de la riqueza, y la deslegitimación de las elites, que las invalidaba como agentes válidos de cambio o incluso de interlocución. Estas conexiones fueron cruciales para configurar un fenómeno nuevo, en el que nuevos valores desplazaron a los lugares comunes que predominaron en los 20 años precedentes.

## Bibliografía

- Aguilar, S. (2008) "La Teoría de Los Clivajes y El Conflicto Social Moderno." Ponencia presentada en el Congreso Español de Ciencia Política. En <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/11012>
- Aguilera, O. (2014) *Generaciones : movimientos juveniles, políticas de la identidad y disputas por la visibilidad en el Chile neoliberal*. Buenos Aires: CLACSO.
- Banco Mundial. (2011) *Programa con crédito con aval del estado (CAE) – Análisis y evaluación*. Reporte.
- Bellei, C., Valenzuela, J.P. & de los Ríos, D. (2010) "Segregación Escolar en Chile", en S. Martinic & G. Elacqua (Eds) *Fin de Ciclo: cambios en la gobernanza del sistema educativo*. Santiago: Universidad Católica-UNESCO.
- Büchi, H. (2013) "Chile ya perdió", *El Mercurio* (13 octubre de 2013), en <http://www.elmercurio.com/blogs/2013/10/13/16043/Chile-ya-perdio.aspx>
- Cabalín, C. (2012) "Neoliberal education and student movements in Chile: inequalities and Malaise", *Policy Futures in Education* 10(2), pp. 219-228.

- Carabineros de Chile (2011) “Control del Orden Público 2011”, Presentación ante Comisión de Derechos Humanos Cámara de Diputados. Reporte no publicado, (Santiago, Chile).
- Carrasco, G. (2010). “Participación y Tendencias Políticas En Estudiantes Universitarios: El Caso de La Universidad de Chile.” *Última Década* 18 (32), pp. 85-103.
- Cifuentes, L., (ed.) (1997). *La Reforma Universitaria En Chile: (1967 - 1973)*. Colección Ciencias Sociales. Santiago: Universidad de Santiago de Chile.
- Della Porta, D., y Diani, M. (2006). *Social Movements. An introduction*. Londres: Wiley-Blackwell.
- Donoso, S. (2013) Dynamics of Change in Chile: Explaining the Emergence of the 2006 Pingüino Movement. *Journal of Latin American Studies*, 45(01), 1–29.
- Durán, C. (2013). “El acontecimiento estudiantil y el viraje en el proceso sociopolítico chileno”, en *Observatorio Social de América Latina (CLACSO)* N° 31, pp. 39-60.
- Elacqua, G. (2012) Education: Chile’s Students Demand Reform. *Americas Quarterly*, disponible en: <http://www.americasquarterly.org/node/3287>
- El Ciudadano (27 Julio 2011), “Un viaje a los colegios tomados del sur de Santiago”, en <http://www.elciudadano.cl/2011/07/21/38667/un-viaje-a-los-colegios-tomados-del-sur-de-santiago/>
- Engel, E. (2011) “Malestar general: ¿causa común?”, *La Tercera* (10 de agosto de 2011), disponible en [http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/malestar\\_general\\_causa\\_com%C3%BA\\_n](http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/malestar_general_causa_com%C3%BA_n)
- Fernández L, J. (2013) “Movimiento estudiantil en Chile (2011): repertorios de acción, marcos de acción colectiva, impactos y desafíos para la política pública”, en *Circunstancia*, Año XI N° 31.
- Fleet, N. (2013) “Fragmented consciousness and student movement in Chile: toward organic intellectuals?” Ponencia presentada en la conferencia de la Society for Latin American Studies (Manchester).
- Flesher Fominaya, C., & Cox, L. (Eds.). (2013). *Understanding European Movements: New Social Movements, Global Justice Struggles, Anti-Austerity Protest*. Abingdon: Routledge.
- Gagyí, A. (2012) “Occupy Wall Street? Position-blindness in the New Leftist Revolution”, *Journal of Critical Globalization Studies*, 5, pp. 143–148.
- Gazmuri, C. (2001) “Notas sobre las elites chilenas 1930-1999”. *Documento de Trabajo* N°3, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Grau, N. (2011). “El secreto de sus ojos”. En diario electrónico *El Mostrador* (23 diciembre 2011). <http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/23/el-secreto-de-sus-ojos/>

- Hachette, D. (2003) Privatizaciones: reforma estructural pero inconclusa. In: Larraín F and Vergara R (eds), *La Transformación Económica de Chile*, Santiago: Centro de Estudios Públicos, pp. 111–153.
- Hipsher, P.L. (1996) Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and Spain. *Comparative Politics*, 28(3), 273.
- Jara, C. (2014) Democratic Legitimacy under Strain? Declining Political Support and Mass Demonstrations in Chile. *European Review of Latin American and Caribbean Studies Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, (97), 25–50.
- Klandermans, B., van der Toorn, J. & van Stekelenburg, J. (2008) “Embeddedness and identity: How immigrants turn grievances into action”, *American Sociological Review*, 73(6), pp. 992–1012.
- Mayol, A., Azócar, C. and Brega, C. (2011) ‘El clivaje público/privado: horizonte último del impacto del movimiento estudiantil 2011 en Chile’. *Kütral* 3: 9-32.
- Mayol, A. (2012). *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: LOM.
- Mizala, A., y Torche, F. (2010) “Bringing the schools back in: the stratification of educational achievement in the Chilean voucher system”, *International Journal of Educational Development* 32(1), pp. 132-144.
- Mizala, A., y Romaguera, P. (2001) “La legislación laboral y el mercado de trabajo: 1975-2000”, en R. Ffench-Davis y Barbara Stallings (Editores), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*, pp. 201-230. Santiago: LOM y CEPAL.
- Mönckeberg, M.O. (2007) *El Negocio de las Universidades en Chile*. Santiago: Debate.
- Moraga, F. (2007). *Muchachos casi silvestres: la Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936*. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile.
- Muñoz, V. (2006). *ACU rescatando el asombro: historia de la Agrupación Cultural Universitaria*. Santiago: La Calabaza del Diablo.
- Muñoz, V. (2012). *Generaciones: juventud universitaria e izquierdas políticas en Chile y México : Universidad de Chile, UNAM, 1984-2006*. Santiago: LOM.
- Navia, P. (2012) Chile’s middle class flexes its muscles. *Current History*, Available from: <http://www.currenthistory.com/Article.php?ID=952>.
- Navia, P. (2012) El verdadero malestar de Chile. *Revista Enfoque*, disponible en: <http://www.revistaenfoque.cl/opinion/item/224-patricio-navia-el-verdadero-malestar>
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2004) *Chile: Reviews of National Education Policies*. Paris: OECD.
- OECD (2008) *Chile: Education at a Glance*. Paris: OECD.
- Oxhorn, P. (1994) Where Did All the Protesters Go? Popular Mobilization and the Transition to Democracy in Chile. *Latin American Perspectives*, 21(3), 49–68.

Radio Cooperativa (Publicado el 19 de julio de 2011), en

[http://www.cooperativa.cl/presidente-pinera-la-educacion-es-un-bien-de-consumo/prontus\\_nots/2011-07-19/134829.html](http://www.cooperativa.cl/presidente-pinera-la-educacion-es-un-bien-de-consumo/prontus_nots/2011-07-19/134829.html)

Reinicke, G. y Valenzuela, M.E. (2011) “Illustrating the gap: collective bargaining and income distribution in Chile”, en S. Hayter (editora) *The role of collective bargaining in the global economy: negotiating for social justice*. Cheltenham: Edward Elgar y Organización Internacional del Trabajo. pp. 187-204.

Riesco, M. (2011) Social security or plunder? En Ximena de la Barra (editora), *Neoliberalism's fractured showcase, Another Chile is possible*. Leiden: BRILL.

Riesco, M. (2012). “Arriba las manos”. En blog del autor, ver

<http://economia.manuelriesco.cl/2012/04/arriba-las-manos.html>

Roco, R. (2005) “La FECH de fines de los 90: relatos de una historia presente”, *Anales de la Universidad de Chile* 17, pp. 51-83.

Salazar, G. (2011) Entrevista en CNN Chile. En

<http://www.youtube.com/watch?v=DJR0Fmc7qk8>

Sehnbruch, K. (2006) *The Chilean labor market: a key to understanding Latin American labor markets*. London: Palgrave Macmillan.

Silver, B. (2003) *Forces of Labor. Workers' Movements and Globalization Since 1870* (New York: Cambridge).

Solimano, A. (2012) *Chile and the neoliberal trap*. Cambridge: Cambridge University Press.

Somma N. (2012) The Chilean student movement of 2011-2012: challenging the marketization of education. *Interface*, 4(2), 296–309.

Soto, H. (2013) “La fuerza de la resaca”, en La Tercera (13 de octubre de 2013),

<http://voces.latercera.com/2013/10/12/hector-soto/la-fuerza-de-la-resaca/>

Tarrow, S. (1998) *Power in movement. Social movements and contentious politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Therborn G. (2014) New masses? Social bases of resistance. *New Left Review*, 85, 7–14.

Tironi, E. (2011) “El Malestar Chileno”, en [www.eugeniotironi.cl/2011/10/el-malestar-chileno/#go\\_page\\_now](http://www.eugeniotironi.cl/2011/10/el-malestar-chileno/#go_page_now)

Tuluy, H. (2013) “Protestas en América Latina”, La Tercera (13 de octubre de 2013).

Disponible en <http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/10/895-546834-9-protestas-en-america-latina.shtml>

Urta, J. (2012) “La movilización estudiantil chilena en 2011. Una cronología”, en *Observatorio Social de América Latina (CLACSO)* N° 31, pp. 23-38.

Vera, S. (2012) “Cronología del conflicto: el movimiento estudiantil en Chile, 2011”, en S. Aguilar (editor) *Anuario del Conflicto Social 2011*. Universidad de Barcelona, pp. 247-251.

Waissbluth, M. (2011) “Las ‘Mejores’ escuelas de Chile”, en  
[http://blog.latercera.com/blog/mwaissbluth/entry/las\\_mejores\\_escuelas\\_de\\_chile](http://blog.latercera.com/blog/mwaissbluth/entry/las_mejores_escuelas_de_chile).

**Recursos electrónicos y encuestas:**

-Mapa colegios en toma en comuna de Concepción:

<https://maps.google.cl/maps/ms?ie=UTF8&vpsrc=6&oe=UTF8&msa=0&msid=213956040942543477321.0004ab4407117870dfcf>

-Estadísticas de la Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Chile.

-Latinobarómetro. ([www.latinobarometro.org](http://www.latinobarometro.org))

-Encuesta de la Universidad Diego Portales.